

EVALUACION DE LA REFORMA AGRARIA

FORO en la FACULTAD DE ECONOMIA de la Universidad Central, 26-7-62

Dr. Salvador de la Plaza

En su Artículo 1º la vigente Ley de Reforma Agraria define lo que debe entenderse por Reforma Agraria y lo que debe emprenderse para realizarla:

"La presente Ley tiene por objeto la transformación de la estructura agraria del país y la incorporación de su población rural al desarrollo económico, social y político de la Nación, mediante la sustitución del sistema latifundista por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra basado en la equitativa distribución de la misma, la adecuada organización del crédito y la asistencia integral para los productores del campo a fin de que la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad".

Es decir, OBJETIVO: transformar la estructura agraria atrasada del país e incorporar a la población campesina diseminada al proceso de la producción; FORMAS: sustituir el sistema latifundista de apropiación de la tierra y las relaciones de producción que le son congénitas por otra estructura basada en la pequeña y mediana propiedad y las consiguientes relaciones de producción. Con tal fin la Ley garantiza a los campesinos el derecho a ser dotados de tierra en propiedad (Art. 2); el derecho a la asistencia crediticia (Art. 109); al suministro y mercadeo de sus productos (Art. 128); a los servicios públicos en general (Art. 5). Como punto de partida para alcanzar la incorporación de la población campesina, la organización de la producción y de los servicios de asistencia, la Ley establece que las dotaciones de tierra se harán a individuos o a grupos de población, debiendo éstos ser organizados en CENTROS AGRARIOS:

"Art. 58: Los beneficiarios de las dotaciones colectivas en todo caso, o de las individuales cuando lo pidieren expresamente, se organizarán con la colaboración del Instituto Agrario Nacional en Centros Agrarios cuya administración estará a cargo de un Comité Administrativo nombrado por los miembros del Centro (Poblado), asesorados, mientras sea necesario, por un Director Técnico designado por el Instituto Agrario Nacional".

Hacer pues una evaluación o apreciación de lo realizado por el Estado en Reforma Agraria desde que la Ley fue promulgada el 5 de marzo de 1960, necesariamente obliga a circunscribirse al siguiente interrogatorio:

¿En que medida la estructura latifundista ha sido sustituida?

¿Qué volumen de población campesina ha sido incorporada al desarrollo económico, social y político de la Nación?

¿En qué medida han sido transformadas las atrasadas relaciones de producción imperantes en el campo?

Los campesinos dotados de tierra ¿han sido organizados en Centros Agrarios?

Los servicios de asistencia crediticia, abastecimiento y mercadeo de productos que la Ley ordena como esenciales para organizar la producción, estabilizar a la población incorporada ¿han sido organizados, funcionan?

Contestar a estas preguntas requiere un punto de referencia y hemos elegido por tal la Encuesta Oficial realizada por el IAN, BAP, MAC y Cordiplán en septiembre de 1961, así como proyectos y declaraciones elaborados por funcionarios responsables, conduciéndonos las respuestas a afirmar que no sólo la Reforma Agraria no ha recibido el impulso que la situación general del país reclamaba, sino que ha sido estancada debido al incumplimiento, por los organismos expresamente encargados de aplicarla, de las disposiciones fundamentales de la Ley.

.....

Es necesario advertir que la dicha encuesta no se limitó a lo realizado en el tiempo de vigencia de la Ley. "La encuesta -se lee en la página 3- abarca todos los asentamientos campesinos de las diversas regiones del país, INCLUSO aquellos que se hicieron antes de 1960 zonificados con el criterio geográfico del Banco Agrícola y Pecuario", es decir, que más bien es la encuesta de los 25 años de reformas agrícolas que en 1937 se iniciaron con las Colonias: Mendoza, Guayabita, Chirgua, etc. Sin embargo y no obstante ese arrastre de "realizaciones", los resultados de la encuesta revelan que en los 25 años ni han sido distribuidas 1.500.000 hectáreas, ni asentadas 50.000 familias como lo han declarado tanto en el interior como en el exterior del país personeros del Ejecutivo. Se desprende de esos resultados que han sido afectadas a los planes agrarios 1.445.569 hectáreas y que de ellas, hasta septiembre 1961, habían sido adjudicadas a parceleros solo 569.462, por lo que quedaban en disponibilidad en el IAN 876.462 Has.- De las 50.000 familias la encuesta localizó nada más que 35.622 parceleros.

¿Cuántas de esas hectáreas adjudicadas y cuántos de esos parceleros asentados lo habían sido antes de 1960? La encuesta no lo determina; esclarecimiento que permitiría avaluar de una parte, lo verdaderamente realizado en los últimos 4 años y, de la otra, cómo han sido empleados por el IAN y el BAP los cuantiosos recursos erogados en los Presupuestos Nacionales desde Julio de 1958. Sin incluir los

Créditos Adicionales, los Bonos de la Deuda Agraria, los egresos del MAC, han sido gastados a través del IAN y del BAP, incluidos - fomento ganadero y planes de café y cacao, 1.074.434.186 bolívares. Por falta de financiamiento no es pues que ha dejado de marchar - la Reforma Agraria.

La encuesta revela otros datos interesantes. Por ejemplo - que de las 569.462 hectáreas adjudicadas en todo el país, 329.805 lo fueron a 6.464 parceleros en solo 4 Estados llaneros - Apure, - Barinas, Guárico y Portuguesa-, por lo que a los restantes 29.158 parceleros de todo el país les fueron adjudicadas 239.302 Has. En esos 4 Estados llaneros además existían disponibles 527.830 Has. de las 876.462 que tiene el IAN en disponibilidad lo que ha venido a confirmar la información oficial publicada por "El Universal" en su edición del 27 de Junio pasado, según la cual "el IAN estaba dando los primeros pasos para incorporar al proceso de la Reforma Agraria 52 fundos con extensión de más de 300.000 Has. en un plan de fomento ganadero". Para completar el cuadro de esos 4 Estados llaneros es de advertir que de las 329.805 Has. fueron adjudicadas en Apure, a 515 parceleros, 231.167 Has. correspondientes a los hatos de propiedad de la Nación: La Candelaria - 120.000 Has.-, El Caimán -100.000-, Santa Bárbara -55.000- Santa Cecilia -29.000-.

En tres Estados del Centro -Aragua, Carabobo y Miranda- con una extensión territorial de 1.820.000 Has., fueron afectadas, en los 25 años, 157.572 Has., incluidas las haciendas de Juan Vicente Gómez y las intervenidas últimamente. Pero de esas hectáreas afectadas sólo fueron adjudicadas 42.411 a 9.276 parceleros, el 15,16% de los 305.953 integrantes de su población rural, no obstante que en el IAN quedaban disponibles 115.661 Has.

En esos tres Estados fueron adquiridos 67 fundos con una superficie de 71.208 Has., el 4,7% del 1.495.000 Has. acaparadas por particulares, lo que demuestra la pequeñísima incidencia, en esos - Estados, de la Reforma Agraria a la apropiación latifundista de la tierra. De los 67 fundos fueron adquiridos en Carabobo 30 y en Aragua 16, sumando la superficie de 6 de ellos, 23.177 Has. por las - que se pagaron 38 millones de bolívares, adjudicando de ellas a --- 1.110 parceleros 9.206 Has. y quedando disponibles 13.917 Has., de las cuales 4.875 en el latifundio Pimentel por lo que se pagaron - 26.500.000 bolívares.

La superficie de la República de es de 90 millones de Has. y de ellas estaban apropiadas, pertenecían a particulares, 23 millones. Como en total han sido adquiridos 167 fundos en todo el país con una extensión de 389.564 Has. tendremos que la tierra de propiedad particular, que el sistema latifundista, sólo ha sido afectada en 1,69%

La población total del país -Censo 1961- es de 7.523.999 habitantes y de ella la rural, la que vive diseminada o en poblados de menos de 2.500 habitantes, es de 2.818.711, el 37,6%. Si tomamos como cifra válida los 35.622 parceleros registrados por la encuesta y la multiplicamos por 5, término medio de una familia campesina, - tendremos que ha sido asentada una población de 178.110, o sea, el

6,32% del total de la población rural. Para apreciar la situación de desamparo y diseminación en que se encuentra la población rural, es suficiente consultar las cifras del Censo de 1961: En 16.598 centros poblados por menos de 100 habitantes, viven 755.000 campesinos; en 4.154 centros entre 100 y 200 habitantes; 696.880 en 2.372 centros entre 200 y 500; 389.878 en 567 centros entre 500 y 1.000 y 373.336 en 256 centros entre 1.000 y 2.500. Los comentarios huelgan.

Desde la colonia los cultivos predominantes en la estructura agraria del país han sido los de café y de cacao, no sólo por la extensión de las áreas que han ocupado sino porque, por estar ubicados principalmente en la zona centro-costera en la que han habitado más de las dos terceras partes de la población, de esos cultivos han dependido las condiciones de vida de una gran mayoría de familias campesinas. El café y el cacao fueron hasta que se comenzó a explotar el petróleo -1917-, la fuente principal de divisas con las que Venezuela contaba para su intercambio internacional. Desde hace varios años y por haber sido tomado muy en cuenta ese hecho, fueron protegidos -esos cultivos con cambios diferenciales para la compra de las divisas provenientes de sus exportaciones. No debe extrañar, por tanto, que esos cultivos hayan sido tradicionalmente y continúen siéndolo, el reduto del sistema latifundista y de las relaciones más atrasadas de producción en el campo

Pues bien, los organismos encargados de realizar la Reforma Agraria, de "transformar la estructura agraria del país", de "sustituir el sistema latifundista por un sistema justo de propiedad, tendencia y explotación de la tierra", han ignorado el hecho real de que todavía hoy esos cultivos se extienden sobre 410.000 has. -340.000 de café y 70.000 de cacao- y de que, según declaraciones de los mismos propietarios de esas haciendas, 150.000 familias -750.000 personas- derivan su sustento de esos cultivos. Por el contrario, parece como si más bien se propusieran reforzar esa estructura.

Recientemente el MAC ha presentado un proyecto para la emisión de 50 millones de bolívares en cédulas hipotecarias con el fin de ayudar a propietarios de haciendas de café a liberarse de deudas contraídas con prestamistas usureros que los agobian con intereses leoninos, en lugar de haber presionado al IAN para que enfrentara el problema -adjudicado a esas 150.000 familias campesinas -mediadores, aparceros, conuqueros, peones, pequeños propietarios- las 410.000 Has. en las que de generación en generación han venido trabajando y habitando en condiciones miserables de vida y de atraso social.

La producción de café y de cacao está en crisis, los precios bajan, los costos aumentan, las haciendas son desatendidas, disminuye la producción, desmejora la calidad, el volumen de divisas por concepto de exportación decrece de año en año. Solo la realización de la Reforma Agraria ofrece la solución para la recuperación de esos cultivos.

La comprobación de que en los 25 años transcurridos la tierra acaparada base del sistema latifundista haya sido afectada en nada más que 1,69% y que solo haya sido asentada el 6,32% de la población campesina diseminada, permite formular una irrefutable conclusión: que por

pervivir en el campo el sistema de propiedad latifundista y tenencia de la tierra y predominar las atrasadas relaciones de producción, continuaban latentes todos los problemas económicos, sociales y políticos para cuya solución fué promulgada la Ley de la Reforma Agraria.

La no aplicación por los organismos oficiales de otras disposiciones fundamentales de la Ley, ha impedido, por otra parte, que lo poco realizado y los cuantiosos recursos invertidos hayan servido, por lo menos, de impulso para un comienzo de transformación de la estructura agraria. La encuesta revela que para septiembre de 1961, en violación a lo establecido por el Art. 58, no habían sido organizados en CENTROS AGRARIOS los grupos campesinos asentados. El 22 de febrero de este año publicó la prensa la siguiente información: "El Instituto Agrario Nacional ha establecido en el caserío de "El Palenque", Municipio de Buena Vista del Distrito Jiménez, el PRIMER Centro Agrario del Estado Lara". La información la suministró el Asesor Técnico de Organización y Planificación de Comunidades Campesinas del IAN."

La ausencia de los Centros Agrarios es lo que ha determinado que no se iniciaran nuevas relaciones de producción capaces de liberar las fuerzas productivas y con ellas el desarrollo de contactos de los productores campesinos asentados en los mercados de consumo y de intercambio de su producción con la producción industrial, relaciones imprescindibles para el incremento de la economía en general del país. En efectos, los Centros Agrarios, además de núcleos de creación y de organización de las actividades campesinas, son al mismo tiempo y principalmente la base sobre la cual puede funcionar eficientemente un sistema de créditos agrícolas para los pequeños productores, una organización del mercadeo de sus productos, el abastecimiento o suministro de la población asentada. Son la única forma organizativa para sustituir las actuales atrasadas relaciones que impiden se liberen las fuerzas productivas en el campo, que mantienen a los campesinos sumidos en la explotación de los acaparadores usureros. Sin la multiplicación de los Centros Agrarios y la coordinación de ellos en escala municipal, distrital estatal y nacional, la Reforma Agraria no puede marchar.

En ese sentido ¿qué nos revelan las encuestas, las cifras de la producción vegetal y de las áreas incorporadas a la producción?

De las 20.082 viviendas que la encuesta registra haber sido construídas en los 25 años para los asentamientos -6.776 por el IAN; 898 por el SAS y 12.408 por los mismos campesinos- para septiembre de 1961 se encuentran desocupadas 2.703 así: 2.064 en las construídas por el IAN, el 30,46%; 260 de las construídas por los campesinos 379, el 3%. Es decir, que 2.703 familias habían abandonado los asentamientos y no precisamente porque no se les hubieran extendido los títulos de propiedad, sino porque no funcionaron los servicios de crédito, de abastecimiento, de mercadeo, de organización de la producción.

En cuanto a la producción es necesario recordar que antes de 1960 habían sido creadas además de las colonias que se mencionaron anteriormente, las de Guanare, El Cenizo, Turén, Unidad Agrícola de Guárico, Unidad Agrícola de los Andes, Yumare, etc. así como también que fueron

construidos los sistemas de riego que hoy existen: Zuata, Taiguayguay, Guataparo, Guárico, Tucupido. No obstante ese importante arrastre entre 1959 y 1961 fueron incorporadas a la producción nada más que 166.430 hectáreas, al pasar la superficie sembrada de 1.189.509 Has. a - - - - 1.355.939 en 1961, incluidas las 410.000 Has. de café y de cacao y las puestas en producción por los grandes y medianos empresarios privados. Las estadísticas publicadas por la Memoria del Banco Central no esclarecen cuántas de esas hectáreas incorporadas lo fueron por campesinos asentados, pero sí observamos que ese aumento de 166.430 Has. es la suma de los aumentos de las áreas sembradas de arroz -29.527 Has.-, de maíz -109.618-, de ajonjolí -5.239-, de algodón -2.980-, de caña de azúcar -6.362- y de tabaco -430-, aumentos que suman un total de 154.157 Has., y si consideramos que precisamente con esos cultivos es que los grandes y medianos empresarios privados han ampliado sus áreas sembradas, lógicamente tenemos que llegar a la conclusión de que en el aumento habido, muy reducida ha sido la participación de los campesinos asentados. La producción vegetal pasó de los 3.341.543 toneladas en 1956 a 3.692.582 en 1960, lo que representa un aumento de 351.040 toneladas en los 5 años, debiéndose advertir que de ese aumento - - - 259.360 correspondieron a Raíces y Tubérculos, cultivos a que siempre se han dedicado los "conuqueros". Por otra parte, los mercados urbanos no han estado suficientemente abastecidos, no obstante que la desocupación en las ciudades y las rebajas de salarios han limitado apreciablemente la capacidad adquisitiva de la población y de que ha continuado importándose caraoas, maíz, ajonjolí, copra, etc.

La Ley de Reforma Agraria dedica sus Títulos III y V a establecer las obligaciones del Estado con respecto a la organización de los servicios de crédito agrícola, de mercadeo y abastecimiento en beneficio de los pequeños productores rurales, encomendando al Banco Agrícola y Pecuário -Art. 194- "la función de tramitar y conceder los créditos a los beneficiarios de esta Ley y de ejecutar las demás operaciones inherentes (mercadeo, suministros), mientras -el Ejecutivo- crea el Instituto que ha de cumplir dichas funciones". En su Art. 109 establece que "el crédito agrícola será organizado por el Estado en forma de que se aplique **PREFERENTEMENTE** para satisfacer las necesidades de crédito de los pequeños y medianos productores rurales y de las cooperativas agrícolas". No obstante esas disposiciones precisas y de que el BAP desde hace años había venido prestando algunos de esos servicios, su actual nueva Junta Administradora resolvió, por una parte destinar sólo el 44% de sus recursos de financiamiento a los pequeños y medianos productores rurales (campesinos) y el 56% a los grandes y medianos empresarios privados (empresarios) y, por la otra, reorganizar la "política de mercadeo" a "objeto -se lee en el Informe Anual 1961- que la empresa privada conociera con exactitud cuáles eran las actividades que el BAP se reservaba y las que por el contrario serían cumplidas por la empresa privada". En consecuencia la Junta Administradora resolvió "suprimir todas las unidades que en el área metropolitana de la ciudad de Caracas, en otras ciudades de la República y aún en los medios rurales estaban haciendo distribución de productos al por menor". Con tal fin eliminó 9 detales que funcionaban en Caracas y ciu-

dades del Estado Miranda, transfirió a las municipalidades respectivas 51 pulperías campesinas localizadas en varios Estados. Transmitió a empresas privadas las actividades de consignatario de productos importados y de transportes que el BAP realizaba; acordó vender las plantas de beneficio de café y de arroz; traspasó a una compañía anónima -ADACA- los silos y frigoríficos del BAP; transfirió al sector privado ciertas importaciones que el BAP venía realizando con el "objeto de compensar deficiencias de la producción nacional y para evitar alzas de precios". Tal reorganización ha implicado que en lugar de haber extendido los servicios de mercadeo y de abastecimiento a los 317 asentamientos que registra la encuesta en todo el país, el BAP haya eliminado lo muy poco que a ese respecto se realizaba, condenando a los campesinos asentados a recurrir, para su abastecimiento y mercadeo de sus productos, a los pulperos usureros de los pueblos y a los "camioneros", representantes ambos en los campos de las más genuinas prácticas de la "empresa privada".

En su informe anual la Junta Administradora declara que en la concesión de créditos había favorecido a los campesinos con respecto a los empresarios privados, y para probarlo, suministra las siguientes y elocuentes cifras: en 1961 el BAP concedió 66.187 créditos a los pequeños productores rurales por un valor de 84 millones de bolívares y a los grandes y medianos empresarios privados 4.310 créditos por un valor de 109.510.000 bolívares, es decir que per-capita correspondieron 1.269 bolívares por campesino y 25.409 bolívares por empresario. Pero lo más grave es que por no haber sido organizados los campesinos asentados en Centros Agrarios y debido a las deficiencias en el pago de los créditos por el BAP concedidos con tan "original" preferencia, los centavos no llegan a tiempo a los campesinos para realizar sus siembras, lo que motiva que no puedan cosechar, se endeuden y cuando cosechan, se vean compelidos a vender sus productos a viles precios a los acaparadores para pagarles los anticipos.

De lo expuesto se desprende que la Reforma Agraria está estancada y que ese estancamiento no se debe a deficiencias de la Ley, como se ha querido hacer creer, sino a que sus disposiciones fundamentales no han sido aplicadas. Poderosas fuerzas económicas extranjeras y nacionales han venido bloqueando la realización de la Reforma Agraria, conscientes de que es básica para la construcción de una economía nacional independiente. Toca, pues a los campesinos diseminados en la República, con el apoyo de las fuerzas progresistas y nacionalistas, romper esas trabas imponiendo la rápida e integral aplicación de la Ley de Reforma Agraria.